

103-23.07

RESOLUCION No. - 181

16 DIC 2020

“POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”
EXPEDIENTE No. PS- 226-2018

El Subcontralor Departamental del Valle del Cauca, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en la Constitución Política de Colombia, Ley 42 de 1993, Ordenanza No. 500 de diciembre 07 de 2018 por el cual se modifica parcialmente la organización estructural de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca y se crea la Dependencia de Subcontraloría, y en lo estipulado en la Resolución Reglamentaria N° 100-28.02 010 de mayo 31 de 2019, que Modifica el Procedimiento, para el Trámite de los Procesos Administrativos Sancionatorios, respectivamente.

ANTECEDENTES

El Director Operativo de Control Fiscal, a través de oficio No. 130-07.08 CACCI No. 7887 del 19 de noviembre de 2018, solicitó a este Despacho, inicio del presente Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal, en contra del Doctor DIEGO VICTORIA MEJIA, Identificado con Cédula de Ciudadanía No. 14.983.922 de Cali., en su condición de Director de la Unidad Ejecutora de Saneamiento “UES” Valle del Cauca, para la época de los hechos, en razón a que incumplió con la obligación fiscal, de no presentar en tiempo y oportunidad la rendición de Fiducia del periodo 2018-1, en el Sistema de Rendición de Cuenta en Línea RCL.

1. El Doctor DIEGO VICTORIA MEJIA, Identificado con Cédula de Ciudadanía No. 14.983.922 de Cali., en su condición de Director de la Unidad Ejecutora de Saneamiento “UES” Valle del Cauca, incumplió con la obligación fiscal, de presentar en tiempo y oportunidad la rendición de Fiducia del periodo 2018-1, en el Sistema de Rendición de Cuenta en Línea RCL en la fecha exigidas por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, tal como lo señala la el Director Operativo de Control Fiscal *“Se evidencio que la Unidad Ejecutora de Saneamiento “UES”, incumplió con las obligaciones fiscales en el Sistema de Rendición de Cuenta en Línea RCL de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, Fiducia Mercantil así:*

La Unidad Ejecutora de Saneamiento “UES”, *NO RINDIÓ la información Rendición de la cuenta periodo 2018-1 en el Sistema de Rendición de Cuentas en Línea RCL consolidad FIDUCIA de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, razón por la cual incumplió el parágrafo 2 del artículo 7, capítulo v de la Resolución reglamentaria N° 008 del 20 de abril de 2016, es así como de acuerdo al término establecido en el calendario de rendición 2018 era hasta el 5 de julio de 2018*

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA			
RENDICION FIDUCIA PERIODO 2018-1			
FECHA LIMITE DE RENDICION: 05/07/2018 12:00:00 AM			
SUBDIRECCIÓN TECNICA CERCOFIS CALI			
No.	ENTIDAD	MUNICIPIO	NO RINDIO
19	Unidad Ejecutora de Saneamiento “UES”	CALI	1

Al revisar la plataforma RCL rendición Fiducia, se evidencia que no contiene el cargue del documento.

2. Con este incumplimiento el Doctor DIEGO VICTORIA MEJIA, Identificado con Cédula de Ciudadanía No. 14.983.922 de Cali., en su condición de Director de la Unidad Ejecutora de Saneamiento "UES" Valle del Cauca, faltan a los deberes fiscales que se le imponen; amen del no cumplimiento del deber establecido en los el parágrafo 2 del artículo 7, capítulo v de la Resolución reglamentaria N° 008 del 20 de abril de 2016, es así como de acuerdo al término establecido en el calendario de rendición 2018 era hasta el 5 de julio de 2018, genera la imposibilidad de que la Contraloría Departamental del Valle obtenga un verdadero insumo para los procesos auditores, así mismo, no contribuye con el fortalecimiento del control social participativo como control estratégico de la adecuada ejecución de los recursos públicos, e impide un control oportuno que permita advertir a los gestores fiscales.
3. Conforme los elementos probatorios recaudado en el expediente PS- 226-2018, por los hechos narrados en párrafos anterior, los cuales no resultaron desvirtuados el trasegar procesal, se profirió la Resolución No. 130 del del once (11) de noviembre de dos mil veinte (2020), imponiendo sanción con multa al Doctor DIEGO VICTORIA MEJIA, Identificado con Cédula de Ciudadanía No. 14.983.922 de Cali., en su condición de Director de la Unidad Ejecutora de Saneamiento "UES" Valle del Cauca, conocido de autos, por valor de un millón seiscientos veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos M/CTE (\$1.627.449.00).
4. El implicado Doctor DIEGO VICTORIA MEJIA, presentó dentro del término, memorial vía correo electrónico del 26 de noviembre de 2020, Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación contra Resolución No. 130 del once (11) de noviembre de dos mil veinte (2020).

ARGUMENTOS Y PETICIONES DEL RECURRENTE

Este despacho expidió la Resolución No. 130 del once (11) de noviembre de dos mil veinte (2020), dentro del proceso administrativo sancionatorio PS- 226-2018, decidiendo de fondo el presente proceso administrativo sancionatorio fiscal, en contra DIEGO VICTORIA MEJIA, Identificado con Cédula de Ciudadanía No. 14.983.922 de Cali., en su condición de Director de la Unidad Ejecutora de Saneamiento "UES" Valle del Cauca, imponiendo una multa consistente la suma de un millón seiscientos veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos M/CTE (\$1.627.449.00), habida cuenta que se configuro probatoriamente lo signado en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993, que reza: *"Los contralores impondrán multas a los servidores públicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a quienes (...); no rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad establecidos por ellas; ...u omitan la presentación de cuentas e informes... y cuando a criterio de los contralores exista mérito suficiente para ello".* Negrillas fuera de texto..

El implicado Doctor DIEGO VICTORIA MEJIA, presentó dentro del término, memorial Vía correo electrónico el 26 de noviembre de 2020, Recurso de Reposición contra Resolución No. 130 del once (11) de noviembre de dos mil veinte (2020), solicitando la interposición del recurso de reposición y en subsidio de apelación en hará de que se revoque en su totalidad tal actuación, sustentado en los siguientes argumentos:

Sin, embargo, y como lo enuncié en los descargos de conclusión *"Esta rendición no se realizó por factores involuntarios acaecidos en la persona que tenía la responsabilidad de acuerdo con las funciones asignadas en el correspondiente manual de rendir este informe, que atañe al contador del proceso de Gestión Financiera, por cuanto él mismo, tenía en su momento varias actividades que desarrollar concernientes al mismo proceso y por un descuido involuntario, omitió enviar el respectivo informe, olvido que no fue mal intencionado o de forma dolosa, y que posteriormente fue remitido y recibido por el ente de control de forma extemporánea."* Fue una responsabilidad que estaba delegada en el contador de la Entidad, el cual por tener varias actividades pendientes envió extemporáneamente el citado informe, es decir que el informe se envió y con un tiempo no tan extenso de diferencia.

Asimismo solicito a su despacho tener en cuenta qué tanto, en la contestación como en los alegatos de conclusión que se presentaron dentro del proceso de la referencia en mi calidad de investigado, no se eludió la responsabilidad de los hechos, ni propendió por la presentación de excusas que llevaran a un desgaste administrativo innecesario y dilatorio del proceso, por cuanto como lo he manifestado desde el inicio de la presente actuación la no rendición del informe correspondiente se debió a una omisión o descuido en términos de rendición del informe por parte del funcionado a quien se le había asignado esta función y este descuido está totalmente desprovisto de intencionalidad o de una acción dolosa:

Conforme a la anteriormente expuesto es que solicito respetuosamente a su despacho revoque la resolución No. 130 de fecha 11 de noviembre del año 2020, en donde se me sanciona, en calidad de Director General de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, con una multa equivalente a la suma de un millón seiscientos veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, M/cte. (1.627.449.00), por los hechos, antes expuestos.

Si ello no da lugar; subsidiariamente se proceda a la disminución de la sanción impuesta teniendo en cuenta que se admitió el hecho por el que se me investiga, que la conducta por la cual se me sanciona como director de la UESVALLE, es la primera vez que se acontece y que se reconoció expresamente el hecho antes de que se decretara alguna prueba.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Sea lo primero anotar, que la Constitución Política señala las atribuciones del contralor entre ellas.

"Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma"

El artículo 272 ibídem señala:

"La de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales..."

...Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la Republica en el artículo 268..."

La ley 42 de 1993, en su artículo 101 ordena:

“Los contralores impondrán multas a los servidores públicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a quienes ...o no lo hagan en la forma y oportunidad establecidos por ellas; ...no cumplan con las obligaciones fiscales y cuando a criterio de los contralores exista mérito suficiente para ello”. (Negrillas fuera de texto).

El artículo 74 numerales 1-2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y Resolución Reglamentaria No. 010 del 31 de mayo de 2019, artículo 20

En virtud a lo anterior procede el despacho a desatar el presente recurso de Reposición.

No se acepta. Sea lo primero manifestarle al Recurrente que la Resolución No. 08 de abril 20 de 2016, **Artículo 4. RESPONSABLES DE RENDIR LA CUENTA E INFORMES.** *El jefe de entidad, el Representante legal o quien haga sus veces en las entidades sujetos control de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, son responsables de rendir las siguientes cuentas e informes:*

6. Información de Deuda Pública, *conforme a lo establecido en el Título V de la presente normatividad”*

La Resolución en cita goza de plena legalidad, tal como lo establece el artículo 87 sobre firmeza de los actos administrativos ley 1437 de 2011, hasta tanto no sea declarada nula a través de demanda ante el Tribunal de lo Contencioso.

Los manuales de funciones establecidos por los sujetos de control, al interior de las entidades están encaminados a cumplir sus obligaciones y deberes respecto de ellas, siendo del resorte de la Gerente exigir su cumplimiento a sus colaboradores, generando mecanismos que le permita en tiempo y oportunidad, previa verificación de la alta gerencia el ingreso de la información a la plataforma RCL.

Es importante tener presente que génesis del control fiscal instituido por la Constitución Política de Colombia como un mecanismo para alcanzar *“el cabal cumplimiento de los objetivos constitucionalmente previstos para las finanzas del Estado”* En este sentido, la jurisprudencia ha estimado que la gestión fiscal hace referencia a la administración y manejo de los bienes y fondos públicos, en las distintas etapas de recaudo o adquisición, conservación, enajenación, gasto, inversión y disposición. A su turno, según la Corte, la vigilancia de esta gestión *“se endereza a establecer si las diferentes operaciones, transacciones y acciones jurídicas, financieras y materiales en las que se traduce la gestión fiscal se cumplieron de acuerdo con las normas prescritas por las autoridades competentes, los principios de contabilidad universalmente aceptados o señalados por el Contador General, los criterios de eficiencia y eficacia aplicables a las entidades que administran recursos públicos y, finalmente, los objetivos, planes, programas y proyectos que constituyen, en un período determinado, las metas y propósitos inmediatos de la administración.”*¹

En este contexto, las contralorías han sido instituidas para vigilar con eficiencia y efectividad la gestión fiscal de los recursos públicos destinados a cumplir con los

¹ Corte Constitucional, Sentencia C-499 del 15 de noviembre de 1998, Magistrado Ponente, Eduardo Cifuentes Muñoz.

finances sociales del estado, siendo su norte la satisfacción de los intereses generales y particulares de los ciudadanos.

El hecho de que se le haya olvidado al funcionario delegado al contador, no es óbice para que la instancia lo exculpe, en la medida en que el ejercicio del control fiscal dejaría de cometer su fin de control y exigencia de informe, correspondiéndole a esta la exigencia de presentar informes entre ellos el de fiducia, en la medida que al Contralor Departamental del Valle de Cauca, le corresponde certificar la situación financiera (artículo 41 de la ley 42 de 1993), como parte de su rendición ante los órganos que la vigilan, la Asamblea Departamental entre otros.

Los órganos de control fiscal, ha sido fortalecido por el legislador, al atribuirle competencias puntuales y trascendentales para fiscalizar y velar porque los recursos públicos cumplan con el objetivo prístino de beneficiar a todos los sectores sociales del país en un mismo pie de igualdad.

Así se concibió la facultad sancionadora que ha sido pensada por las cortes como una herramienta correctiva, coercitiva y correccional de las contralorías **con el fin de poder exigir a los sujetos de control el cumplimiento oportuno y fehaciente de sus obligaciones fiscales**, siempre que no se desmarque de los principios constitucionales y los orientadores de toda actuación administrativa, como el debido proceso, instituido como una garantía constitucional de convivencia social en un Estado social de derecho.

La Corte Constitucional señala: *“La potestad administrativa sancionadora de la administración, se traduce normalmente en la sanción correctiva (...) para reprimir las acciones u omisiones antijurídicas y constituye un complemento de la potestad de mando, pues contribuye a asegurar el cumplimiento de las decisiones administrativas. La potestad sancionadora reconocida a la administración (...) correccional (por las infracciones de los particulares a las obligaciones o restricciones en materia de higiene, tránsito, financiera, fiscal, etc.).²*

La culpa grave siendo un elemento subjetivo de la responsabilidad y de aplicarse este elemento, habría que analizarse en cada caso concreto el estado mental y social del agente; pero como ello no es posible, es necesario **para efectos de poder apreciar la culpa tenerse en cuenta el modo de obrar de un hombre prudente y diligente**, cuya capacidad de prever, no se relaciona con los conocimientos individuales de cada persona, sino con los conocimientos que son exigidos en el estado actual de la civilización para desempeñar determinados oficios o profesiones, tal como lo ha señalado la jurisprudencia.

La Corte Constitucional, Sentencia C-077/07 (C-181 de 2002) manifiesta *“que si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la consecuencia jurídica de tal principio no podría ser otra que la necesidad de castigo de las conductas que atentan contra tales presupuestos, conductas que - por contrapartida lógica- son entre otras, la negligencia, la imprudencia, la falta de cuidado y la impericia. En términos generales, la infracción a un deber de cuidado o diligencia”*.

² Corte Constitucional, Sentencia C-214 del 28 de abril de 1994, Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell.

Respecto a la culpa la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado de la siguiente manera:

“La culpa, pues, se presenta...

b) Cuando el autor no prevé el daño que pueda causarse con un acto suyo, pero hubiera podido preverlo, dado su desarrollo mental y conocimiento de los hechos, aquí se trata de una negligencia o culpa inconsciente. “...una persona prudente debe examinar continuamente los instrumentos que emplea en una determinada actividad.”

Recaba el despacho que, por ser el ordenador del gasto, para efecto de rendición de la cuenta es el único responsable, tal como lo establece la Resolución Reglamentaria 008 del 20 de abril de 2016, en su artículo 4 Responsables de Rendir la Cuenta e Informes. El Jefe de la entidad, el Representante legal o quien haga sus veces en las entidades sujetos de control de la Contraloría Departamental de Valle del Cauca, son responsables de rendir las siguientes cuentas e informes:

6. Información de deuda pública, conforme a lo establecido en el título V de la presente normatividad.

A su vez el artículo 7 ídem, De la cuenta consolidada por entidad. En su párrafo 2. La rendición de los componentes pory Fiducia Mercantil se rendirá de formar semestral, el tercer día hábil del mes siguiente a cada semestre.

El elemento culpabilidad se calificó bajo la modalidad de **CULPA GRAVE**, en la medida en que al omitir un deber legal, desconoció e incumplió las normas que en el momento de cumplirse su omisión, regulaban la materia, en relación con la rendición de la cuenta, Resolución 08 de 2016, es así que tenía el deber legal de rendir fiducia 2018-1 el 5 de julio de 2018, por tanto, era un **deber fiscal**, cumplirlo y acatarlo en lo que correspondía a su vigilancia. Y es que precisamente, los Servidores Públicos según lo dispone el artículo 6° de la Constitución Política, no solo somos responsables por infringir la Constitución y la ley, sino también por la omisión o la extralimitación de nuestras funciones.

El hecho culposo puede tener lugar por negligencia, imprudencia e impericia, para el caso que nos ocupa, nos referiremos solamente a:

La negligencia implica una falta en la atención que debe prestar el agente en sus actuaciones. El negligente deja de realizar una conducta a la cual estaba obligado, y no emplea la diligencia necesaria para evitar un resultado dañoso; en consecuencia es un descuido de su conducta.

La Legislación Colombiana acogió en el Código Civil, el concepto de culpa en tres definiciones normativas que emanan del artículo 63, así:

1. *“Culpa grave, negligencia grave, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”.*

Veamos lo que al respecto reseña la Corte Constitucional en las Sentencias C-597 de 1996, MP Alejandro Martínez Caballero; C-1161 de 6 de septiembre de 2000, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero; Sentencia C-417/93, MP José Gregorio Hernández Galindo y Sentencia C-280 de 1996.

“(...) El principio de legalidad, propio del estado de derecho y, por ende, aplicable a todo el ordenamiento normativo, donde se haga uso del poder punitivo, impone que, para la aplicación de una sanción, exista un precepto en donde se describa claramente la conducta reprochable (tipicidad).”

“(...) Uno de los principios esenciales en el derecho sancionador es el de la legalidad, según el cual las conductas sancionables no sólo deben estar descritas en norma previa (tipicidad) sino que, además, deben tener un fundamento legal, por lo cual su definición no puede ser delegada en la autoridad administrativa. Además, es claro que el principio de legalidad implica también que la sanción debe estar predeterminada ya que debe haber certidumbre normativa previa sobre la sanción a ser impuesta pues, como esta Corporación ya lo había señalado, las normas que consagran las faltas deben estatuir “también con carácter previo, los correctivos y sanciones aplicables a quienes incurran en aquéllas”. Negrillas fuera de texto.

Por último, es importante resaltar lo manifestado por el Doctor Gómez Quintero, ex – asesor del Despacho del Vice Contralor General de la República, quien afirma sobre la conducta del gestor fiscal:

(...)

La referencia a la culpa debe entenderse en la común y ordinaria acepción de aquel comportamiento, en el cual el sujeto no previó las consecuencias de su actuar pudiendo hacerlo, o si lo hizo, confió en obtener otro resultado; en igual forma, cuando se realiza por inexperiencia o por impericia o por mera negligencia. ...

(...)

Finalmente, debe expresarse que la conducta desplegada puede corresponder a una acción o a una omisión; dejar de hacer algo que hacer parte de la función o trabajo (como no establecer controles o si se establecen no hacerlos efectivos), es tan reprochable como hacer lo no permitido o no autorizado por la ley o el reglamento...”

El objetivo primordial de la Rendición Fiducia es obtener un insumo necesario para que el señor Contralor Departamental del Valle, pueda rendir ante a los entes de control que le vigilan, el consolidado de todas las Fiducias, a nivel Departamental, siendo evidente que el no tener el reporte, se encuadraría en la duda de la rendición lo que le genera un proceso Administrativo Sancionatorio. En consecuencia, de acuerdo con la norma, los métodos y procedimientos que las Contralorías establezcan al respecto, existe una obligación imperativa para el sujeto de control fiscal frente a la Rendición Fiducia.

En este caso, es evidente que el proceso sancionatorio se promovió como consecuencia de un incumplimiento a la obligación de presentar el proceso Fiducia, cuyo hecho de omisión que infringe directamente el deber normativo, es prueba suficiente para forjar el criterio de culpabilidad que busca recriminar la autoridad administrativa con el proceso sancionatorio. Luego basta la mera conducta de abstención frente al cumplimiento de un deber legal por parte del sujeto procesado, para dar lugar a la aplicación de la sanción administrativa, reduciéndose la labor de defensa a demostrar que si bien hubo incumplimiento este se debió tal como lo señala el implicado “por cuanto él mismo, tenía en su momento varias actividades que desarrollar concernientes al mismo proceso y por un descuido involuntario, omitió enviar el respectivo informe, olvido que no fue mal intencionado o de forma dolosa ,y

que posteriormente fue remitido y recibido por el ente de control de forma extemporánea..”.

Conforme a ello, no es de recibo para este despacho el que se pretenda por la implicado el justificar su omisión frente al deber legal de rendir el componente Fiducia, ante el ente de Control Fiscal, en tanto que tal omisión más aun cuando se reconoce a través del certificado expedido por la plataforma RCL, en donde se evidencia la rendición del componente **Fiducia 2018-1, el 5 de julio de 2018**, sin que se evidencie registro de extemporaneidad presentada por el implicado durante el decurso del proceso, en las actuaciones de descargos y alegatos de conclusión, lo que conlleva un entorpecimiento al ejercicio del control fiscal que la Contraloría debe realizar.

Así mismo, es importante precisarle que los procesos Administrativos Sancionatorios, no tienen la connotación de responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal. El Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal, es el conjunto de actuaciones administrativas que adelanta la Contraloría Departamental del Valle, con el fin de impulsar el correcto y oportuno cumplimiento de ciertas obligaciones que permiten el adecuado, transparente y eficiente control fiscal.

La Ley 42 de 1993 en sus artículos 99 y siguientes, prevé que los contralores en ámbito de su jurisdicción y competencia, podrán imponer sanciones o solicitar a la autoridad competente su aplicación, según sea el caso, a cualquier entidad de la administración, servidor público o particular que maneje fondos o bienes del Estado; cuando consideren con base en los resultados de la vigilancia fiscal, que han obrado contrariando los principios establecidos en el artículo 8° de dicha ley.

Es importante señalar, lo que la jurisprudencia ha dicho con relación a las facultades sancionatorias reconocidas a las autoridades administrativas, que puede adoptar la administración para constreñir o apremiar a los servidores públicos a darle cumplimiento a sus obligaciones. Esta facultad tiene naturaleza administrativa y, su ejercicio está sometido a la observancia de las reglas establecidas en el libro Primero del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en particular, a aquellas que regulan las actuaciones iniciadas por parte de la Dirección Operativa de Control Fiscal. Así mismo, se observa que la multa es una medida correccional que pueden ser impuestas directamente por los Contralores en ejercicio del control fiscal, y en manera alguna se debe interpretar como conducta en ámbito de responsabilidad fiscal, disciplinaria o penal, cuyas instancias son autónomas, es por ello que la culpa no se puede entender en la misma connotación.

En cuanto a la sanción impuesta la instancia aplicó lo establecido para los Procesos Administrativos Sancionatorio la ley 1437 de 2011 en el capítulo III artículo 50 señala *“Graduación de las sanciones. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones administrativas se graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto resultaren aplicables..”* (resaltado fuera de texto).

En virtud a tal disposición, la instancia procedió a establecer como sanción la establecida en la Resolución 130 del 11 de noviembre de 2020, de conformidad la al salario devengado por el implicado al momento de los hechos, el cual esta dentro de los cinco salarios devengados de conformidad a la ley 42 de 1993 artículo 101.

Así las cosas, con base en el análisis precedente se concluye que tanto los métodos, procedimientos, plazos y demás aspectos relacionados con la vigilancia de la

gestión fiscal en las entidades públicas o privadas que manejen fondos públicos, corresponde reglamentarlos o fijarlos a los contralores, acorde con los principios constitucionales y legales, de suerte que, la imposición de la multa, resulta incuestionable, desde el punto de vista legal, y la sanción establecida en la Resolución, misma que se atempera a la legalidad.

DECISION

Fundada en los razonamientos condensados en precedencia, decide la instancia **CONFIRMAR EN TODAS SUS PARTES** la Resolución 130 del 11 de noviembre de 2020, en lo pertinente a la imposición de multa consistente en un millón seiscientos veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos M/CTE (\$1.627.449.00)

En mérito de lo expuesto, el señor Subcontralor de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR EN TODAS SUS PARTES, la Resolución No. 130 del 11 de noviembre de 2020, en contra el Doctor DIEGO VICTORIA MEJIA, Identificado con Cédula de Ciudadanía No. 14.983.922 de Cali., en su condición de Director de la Unidad Ejecutora de Saneamiento "UES" Valle del Cauca, para la época de los hechos, consistente en un millón seiscientos veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos M/CTE (\$1.627.449.00), de conformidad con las normas que regulan la materia y las elucidaciones que obra en la parte motiva de la presente disposición.

SEGUNDO: Notificar al Señor DIEGO VICTORIA MEJIA, en la dirección Unidad Ejecutora de Saneamiento "UES" Carrera 37ª # 4- 88 Cali, correo electrónico controlinterno@uesvalle.gov.co en la forma y términos previstos en los artículos 67 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, lo aquí resuelto, e infórmesele que se remite a segunda instancia para dar trámite al recurso de apelación.

TERCERO: Conceder el recurso de apelación ante la Señora Contralora Departamental del Valle del Cauca, interpuesto subsidiariamente al de reposición, en consecuencia enviar el expediente al Despacho de la misma, una vez notificada esta resolución.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE



DIEGO ARMANDO GARCIA BECERRA
SubContralor Departamental del Valle del Cauca

